



JOSEFINA
ARAOS
BRALIC

Subsidiariedad: camino de encuentro entre tradiciones políticas



 JOSEFINA ARAOS BRALIC

Investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES). Licenciada y Magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente cursa el doctorado en Filosofía en la Universidad de los Andes.

En el marco del proceso constituyente, ¿entorno a qué pueden encontrarse las distintas almas presentes en la derecha? Considerando su difícil convivencia interna en el último tiempo, ¿es posible abrir instancias de acuerdo que le permitan instalar agendas propias en un espacio donde es minoría? Se trata de preguntas relevantes, y de su respuesta depende que el sector tenga algo significativo que ofrecer en la futura Carta Fundamental, a la cual asignamos el papel de liderar la reconstrucción de nuestro fracturado sistema político.

Para intentar responderlas, podríamos movernos entre diversos principios importantes en el ideario histórico de la derecha, buscando aquellos que tal vez servirían hoy como instancia de convergencia. Aunque se trata de un ejercicio siempre necesario, que obliga a volver a justificar las respectivas posiciones, parece especialmente urgente al interior de la derecha, luego de la parálisis en que se vio sumida por la crisis social y política del 2019. Es cierto que el profundo cuestionamiento evidenciado durante el estallido interpeló a toda la clase política, pero a la derecha la tomó particularmente desprevenida esta explosión de furia. Y esto se debe, entre otras cosas, a la borrachera electoral con que asumió el segundo gobierno de Sebastián Piñera —que confundió una mayoría electoral puntual con una adhesión de más largo aliento—, junto con una renuncia a pensar y revisar las propias categorías y agendas promovidas a la luz de las nuevas circunstancias. La derecha, en el fondo, carecía

de una reflexión sociológica respecto del presente de nuestro país, así como de una revisión crítica de su propio proyecto político. Así, ante una crisis de tal magnitud, no tuvo prácticamente nada que decir. Como el triunfo en la presidencial del 2017 fue tan contundente, se asumió que si en Chile había descontento, se debía tan solo a un estancamiento en el crecimiento económico y un programa transformador de Bachelet que quiso «bajarnos del tren del éxito». Piñera, entonces, llegó por segunda vez a La Moneda renunciando a sus promesas de campaña e instalando un gabinete «sin complejos» que, dos años después, despertó a bofetadas de sus inocentes ensoñaciones. Si algo espera decir a Chile este sector, y si en el marco del proceso constituyente quiere ser algo más que una voz testimonial, tendrá que ser capaz de volver a justificar sus principios y objetivos, al tiempo que dar cuenta, en sus propios términos, del escenario actual de nuestro país. Se trata de tomar distancia de la fuerte influencia ejercida por un piñerismo que termina su mandato en silencio, con una aprobación en el suelo. Las ideas, contrario a lo que dicen voces fuertes al interior de una derecha que por momentos recupera fuerzas, no «están», como si fueran una especie de repositorio invariable, sino que se deben ir redefiniendo y adecuando en función de cada ciclo histórico. En medio de esa difícil tarea se encuentra el sector, y en ello se juega su futuro; no en ceder al adversario, como les gusta decir a algunos (y como en el caso de los retiros de fondos previsionales, efectivamente terminan haciendo

varios), sino en ser capaces de reivindicar un proyecto político original que nazca de una interpretación sofisticada de lo que ha ocurrido en Chile.

Pero conviene advertir que en este desafío deben encontrarse todas las tradiciones políticas que forman parte de la derecha. Porque la tarea que ella tiene por delante no es una discusión sobre cuál de ellas primará —como si se tratara de lograr que liberales se sobrepongan a la supuesta hegemonía conservadora o viceversa—, sino acerca de cómo entenderá y desplegará su acción política considerando dicha pluralidad. Como decía al comienzo, el desafío no consiste simplemente en redefinir las ideas del sector, sino en lograr articular un modo de trabajo que permita reconstruir su fractura respecto de la socie-

dad. Esa fue la mayor evidencia después del estallido: una desconexión con una ciudadanía a la que ya no conoce y, por lo mismo, no sabe interpretar. Este desafío, tan relevante, es el que no entendió el candidato Sebastián Sichel, y ese error explica en parte su derrota en la primera vuelta. Más allá de sus distintos problemas, uno importante fue, hacia el final de la campaña, y al constatar el ascenso de José Antonio Kast, identificar la moderación política que debía encarnar, con abrazar irreflexivamente las banderas progresistas. De este modo, impuso una suerte de enfrentamiento entre tradiciones políticas en la centroderecha que lo estaban apoyando, como si los problemas del candidato del Frente Social Cristiano se explicaran por sus posiciones en la llamada «agenda valórica». Así, parecía que, para Sichel, Kast no ofrecía gobernabilidad, ni seguridad, ni transformaciones, ni respeto a la dignidad humana de cada cual, porque estaba en contra del aborto o del matrimonio homosexual. Con esa estrategia, y quizás sin darse

En Chile la subsidiariedad terminó identificada con un modelo institucional concreto y en una de sus múltiples alternativas de traducción: una donde la autoridad política debe, en lo posible, sustraerse, intervenir lo mínimo y, apenas se pueda, retirarse. Sin embargo, su sentido es muchísimo más amplio y rico.

cuenta, fue excluyendo a un grupo de su propia base de apoyo que, lógicamente, de a poco decidió retirarse. ¿Cómo permanecer en una coalición donde aquello que se defiende parece ser ilegítimo? Sichel adhirió sin más a la tesis progresista general, ganando apoyo del *mainstream* tuitero, pero sin sacar demasiados réditos (en la izquierda siempre habrá alguien más progresista que él). Prefirió una campaña de élite, que lo hizo quedar bien con ciertos grupos, pero carente de arraigo social contundente. Las cosas se jugaban en cambio en mostrar una mirada más compleja respecto de la violencia, en ofrecer una postura más reconciliadora frente a nuestro doloroso pasado reciente, y en proponer proyectos de transformación que respondieran a

los profundos anhelos ciudadanos. Tan profundos como las desoídas demandas de orden que hicieron triunfar a Kast, Sichel optó, más bien, por enfrentar a liberales y conservadores, desgranando al sector que debía convocar transversalmente y

errando en el tipo de tarea que requiere emprender la derecha. Esta no se juega en qué tipo de tradiciones se imponen, sino en consolidar una forma de hacer política y de entender su función en nuestra convivencia.

¿Cómo se articula esa forma de hacer política, esa suerte de disposición o actitud, con la reflexión sobre los propios principios e ideas que inspiran a la centroderecha? Es parte del trabajo que se debe emprender, pero podemos ensayar aquí un pequeño ejercicio. Un principio fundamental al interior del sector es la subsidiariedad, que ha permitido el encuentro de sus distintas tradiciones en una categoría que concibe de modo singular la función de la institucionalidad en general, y del Estado en particular. Aunque su historia es más larga que nuestra

trayectoria reciente, en Chile resuena como la síntesis paradigmática del «modelo» instaurado por la dictadura de Pinochet y perfeccionado por la Concertación. Palabra clave en el proyecto político de Jaime Guzmán, la subsidiariedad se identificó con la lucha contra el marxismo. Un Estado subsidiario era una de las garantías para evitar la amenaza comunista en el futuro.

No podemos extendernos aquí en el detalle de esa historia, pero es evidente que, en el diagnóstico posterior, tanto en sus detractores como defensores, la subsidiariedad terminó significando en Chile fundamentalmente el retiro del Estado, la despolitización de la sociedad y la primacía absoluta de un individuo que, pareciera, solo puede realizarse en el campo privado. Todo lo demás, las instancias comunes y compartidas, se volvió materia de sospecha, vulnerable a la dominación socialista. En consecuencia, y así lo han planteado varios autores, el principio terminó identificándose exclusivamente con su dimensión negativa, reduciendo de a poco la función estatal a una mera intervención mínima en el imaginario de la centroderecha; es decir, ella solo aparece cuando la sociedad no puede cubrir una necesidad y ojalá por el menor tiempo posible. Un remedio temporal que el mismo despliegue del progreso permitirá a la larga erradicar. Las graves deudas del Estado chileno en materia social y la incapacidad de la derecha de anticiparse a los problemas sociales que estallarían después son así inseparables de los problemas en la comprensión y aplicación que tuvo la subsidiariedad.

Ha sido tal el cuestionamiento del principio que muchos han planteado si no conviene más bien renunciar a él, incluso aquellos que aún lo reivindican. ¿Será correcta esta intuición? ¿Habrà que abandonar la subsidiariedad ante el cambio de ciclo que estamos viviendo? ¿Desprenderse de ella porque se ha asociado inevitablemente a los problemas de nuestras instituciones y de todo aquello que buscamos reformar o algunos derechamente reemplazar? ¿Cómo debe situarse la derecha frente a esta realidad?, ¿abandonando un principio

esencial por las nuevas circunstancias?, ¿o cerrándose dogmáticamente en él? Como ocurre con toda tradición recibida, el camino está justo en medio de ambos extremos. Hay que volver sobre el concepto que ha sido cuestionado, para pensar las razones de la crítica de la cual ha sido objeto y ponderarlas, pero también para recordar su definición original. En Chile, la subsidiariedad terminó identificada con un modelo institucional concreto y en una de sus múltiples alternativas de traducción: una donde la autoridad política debe, en lo posible, sustraerse, intervenir lo mínimo y, apenas se pueda, retirarse. Sin embargo, su sentido es muchísimo más amplio y rico. La subsidiariedad, como ha dicho Chantal Delsol (IES, 2021), designa ante todo un criterio: la prevención de la institucionalidad de llegar y actuar sobre la realidad, ante el reconocimiento de que lo primero es el hombre, la persona, la comunidad. La institucionalidad y el Estado vienen ontológicamente después y eso exige una acción, en principio, secundaria, de respuesta, y no de acción originaria. La intuición detrás es que si se desconoce ese dato, puede terminar por justificarse, finalmente, una intervención despótica, que asume que delante o antes que ella no hay nada. No es que haya una mala intención o voluntad en esa intervención que puede estar inspirada en los mejores motivos, pero sí un punto ciego en que se actúa como si al frente solo existiera una página en blanco —imagen que hoy seduce a tantos—. No se trata, entonces, de que el Estado deba, en principio, intervenir o no, sino que debe hacerlo siempre respetando ese dato, esa anterioridad. Y, por lo mismo, tiene que hacerlo solo en la medida en que las personas y sus comunidades lo requieran. Eso puede significar retiro o acción, presencia excepcional o de largo aliento, en fin. Es un criterio de juicio y discernimiento práctico para que en cada caso concreto se delimite la esfera de competencias de un poder que siempre debe actuar, sabiendo que otro viene primero, y que ese otro es el protagonista. Que la acción institucional no crea nada, sino que está al servicio: apoya, acompaña, secunda, porque

El desafío no es, entonces, renunciar a la subsidiariedad, sino articular una definición más compleja, mostrando la posibilidad de una traducción institucional diferente, que no termine en los problemas del pasado. En eso consiste su revisión crítica. Contrario a lo que se piensa, atreverse a leer el presente permite volver sobre los propios principios y ser capaces de defender mejor su papel.

responde a un llamado que hace alguien y es a él a quien se debe.

Además del valor y riqueza de un concepto tan complejo, es difícil no pensar en la fuerza de su significado para el tipo de demandas en el Chile de hoy. Descentralización, empoderamiento local, integración social, política del cuidado, solo por nombrar algunas, son todas reivindicaciones que exigen, se sepa o no, una institucionalidad y un Estado que entienda subsidiariamente su función. Si no, puede volverse una instancia omnicompreensiva y avasalladora. Tanto así, que sus mismos adversarios han requerido del término, como lo mostró el diputado Gabriel Boric al describir en el Congreso la solución al problema del centralismo chileno en términos de una subsidiariedad territorial. Y es que si no es subsidiario, el Estado termina por invadirlo todo.

El desafío no es, entonces, renunciar a la subsidiariedad, sino articular una definición más compleja, mostrando la posibilidad de una traducción institucional diferente, que no termine en los problemas del pasado. En eso consiste su revisión crítica. Contrario a lo que se piensa, atreverse a leer el presente permite volver sobre los propios

principios y ser capaces de defender mejor su papel. Ese es parte del trabajo que tiene por delante la derecha, para así vincular su desafío de reconstruirse con el de aportar a Chile con un proyecto político articulado en torno a los principios que ella reivindica. Pero, para volver al inicio, este ejercicio de crítica y reapropiación de la subsidiariedad es fundamental, pues constituye uno de los espacios que tienen efectivamente en común las tradiciones políticas que componen el sector. Y es que detrás de ella reside la convicción compartida de que siempre hay algo valioso que cuidar. Porque los protagonistas son las personas, ante las cuales la institucionalidad responde cuando es requerida por aquellos a los cuales se debe. No es la subsidiariedad el único ni el gran principio. Es solo un ejemplo para ilustrar el ejercicio que necesita emprender la derecha, y descubrir que ello no implica renunciar a la defensa de sus ideas. Ilustra también cómo ese ejercicio tiene que ver no tanto con la hegemonía de una tradición sobre otra, sino con ser capaces de emprender un trabajo comprensivo e interpretativo, con sus propias categorías y con su propio presente, para rehabilitar su deteriorada pero esencial función política. [®]